



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y  
Protección de Datos Personales

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

OFICIO: INAI/SPDP/641/17

ASUNTO: Respuesta al oficio INE/DJ/23220/2017

*"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos".*

Ciudad de México a 04 de octubre de 2017.

**Gabriel Mendoza Elvira**  
**Director Jurídico**  
**Instituto Nacional Electoral**  
**P r e s e n t e**

Hago referencia a la consulta formulada mediante oficio no. INE/DJ/23220/2017, relativa al Proyecto de Reglamento de ese Instituto Nacional Electoral, en materia de protección de datos personales.

Sobre el particular y por instrucciones del Secretario de Protección de Datos Personales, Luis Gustavo Parra Noriega, adjunto la opinión técnica realizada por la Dirección General de Normatividad y Consulta, adscrita a la Secretaría mediante la cual se brinda atención a la consulta formulada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

**Rubén Carbajal Zárate**  
**Director de Coordinación y Seguimiento**  
**Secretaría de Protección de Datos Personales**

OFICINA DE PARTES

2017 OCT -4 PM 8:53

INSTITUTO NACIONAL  
ELECTORAL

C.c. p. Areli Cano Guadiana, Comisionada Coordinadora de la Comisión de Normatividad de Datos Personales. Presente  
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada integrante de la Comisión de Normatividad de Datos Personales. Presente  
Ximena Puente de la Mora, Comisionada integrante de la Comisión de Normatividad de Datos Personales. Presente  
Luis Gustavo Parra Noriega, Secretario de Protección de Datos Personales. INAI. Presente  
Edgardo Martínez Rojas, Director General de Normatividad y Consulta. INAI. Presente

17/01/17

2

3

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
DIRECCIÓN JURÍDICA

RECIBIDO  
05 OCT 2017

*R: p6* *Mez*  
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS

## Proyecto de Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de protección de datos personales

### I. Presentación

El presente documento tiene por objeto emitir una opinión técnica en materia de protección de datos personales respecto al Proyecto de Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de protección de datos personales.

### II. Glosario

Para los efectos de la presente opinión técnica se entenderá por:

Derechos ARCO	Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
INAI	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
INE	Instituto Nacional Electoral.
Ley General	Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Proyecto normativo	Proyecto de Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de protección de datos personales.
Sistema Nacional de Transparencia	Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

### III. Antecedentes

- El 18 de agosto de 2017, se recibió en este Instituto la consulta presentada por el INE en torno al proyecto de Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de protección de datos personales, para su opinión.
- El 08 de septiembre de 2017, se celebró una primera reunión, de carácter técnico, entre servidores públicos del INE e INAI.
- El 14 de septiembre de 2017, se llevó a cabo una segunda reunión, en seguimiento de la reunión señalada en el párrafo anterior, con la finalidad de puntualizar aspectos que quedaron pendientes en ésta.
- El 25 de septiembre de 2017, la Secretaría de Protección de Datos Personales recibió el oficio número INE/DJ/2322/2017 suscrito por el Director Jurídico del INE mediante el cual manifestaba lo siguiente:

“En mi carácter de Secretario Técnico del Comité de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral, y en el marco de la elaboración y revisión del proyecto de Reglamento en materia de Protección de Datos Personales, cuya elaboración ordenó el Consejo General de este Instituto, le solicito a ese órgano garante lo siguiente:

En relación con lo establecido en el artículo 54 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, cuál es la interpretación que, en opinión de ese Instituto, debe darse respecto de la aplicación de los procedimientos para tutelar los

derechos ARCO en materia del Registro Federal de Electores, a fin de garantizar la máxima protección de los mismos.

Lo anterior, en atención a que, de conformidad con lo previsto en Libro Cuarto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Instituto cuenta con una regulación específica para la formación, actualización y depuración del Padrón Electoral, así como para la emisión de la credencial para votar, entre otros instrumentos de indole electoral que contienen datos personales, inherentes a la función electoral otorgada constitucionalmente a este órgano autónomo [sic].”

#### **IV. Competencia**

El artículo 42, fracción II del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales<sup>1</sup> dispone que entre las atribuciones de la Dirección General de Normatividad y Consulta se encuentra atender consultas en materia de protección de datos personales del sector público y privado. En ese sentido, a continuación se formula una orientación técnica sobre los planteamientos formulados por el consultante de conformidad con lo dispuesto en la Ley General.<sup>2</sup>

#### **V. Consideraciones**

##### **1. Alcance del artículo 54 de la Ley General**

Sobre el particular, los artículos 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54 y 57 de la Ley General disponen lo siguiente:

“**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal.

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.

<sup>1</sup> Disponible en el siguiente vínculo electrónico: [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5469197&fecha=17/01/2017](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469197&fecha=17/01/2017), consultado por última vez el 4 de octubre de 2017.

<sup>2</sup> Disponible en el siguiente vínculo electrónico: [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5469940&fecha=26/01/2017](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469940&fecha=26/01/2017), consultado por última vez el 4 de octubre de 2017.

En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

**Artículo 43.** En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.

**Artículo 44.** El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento.

**Artículo 45.** El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.

**Artículo 46.** El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.

**Artículo 47.** El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo, cuando:

- I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular, y
- II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.

**Artículo 48.** La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que se formulen a los responsables, se sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

**Artículo 54.** Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del procedimiento que el responsable haya institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en este Capítulo."

De las disposiciones anteriores se advierte lo siguiente:

- La Ley General tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos y fideicomisos y fondos públicos del orden federal, así como partidos políticos.
- En todo momento, el titular o su representante podrá solicitar al responsable el ejercicio de sus derechos ARCO, lo cual implica:



- Solicitar sus datos personales o información sobre el tratamiento a que estén sometidos éstos.
  - Rectificar sus datos personales que resulten incompletos, inexactos o desactualizados.
  - Solicitar la supresión de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, de tal manera que dejen de ser tratados por éste y, en consecuencia, ya no se encuentre en su posesión.
  - Oponerse al tratamiento de sus datos personales para evitar que su persistencia le cause un daño o perjuicio, o bien, cuando sea objeto de tratamientos automatizados de datos personales sin que exista una intervención humana.
- El derecho que tiene el titular de elegir la vía a través de la cual ejercerá sus derechos ARCO cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite específico para el ejercicio de estos derechos, ya sea a través del procedimiento general, o bien, el trámite específico.

Sobre esta última prerrogativa, conviene manifestar que no siempre las leyes en materia de datos personales resultan ser la vía idónea para atender las peticiones de los titulares respecto al ejercicio de los derechos ARCO, no obstante que la petición esté relacionada específicamente con el tratamiento de datos personales.

Así, dependiendo de las implicaciones que el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales produzca en un contexto jurídico determinado se estará en posibilidades de calificar la idoneidad de la vía.

En este sentido, si el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales implica que se generen una serie de efectos que impacten sustantivamente en la definición de cuestiones jurídicas vinculadas a aspectos civiles, administrativos, mercantiles, electorales, entre otros, la petición del titular, no obstante, que a primera vista se trate de un ejercicio de derechos ARCO, debe ser conocida y resuelta por la instancia o autoridad competente que corresponda, ya que de otro modo se correría el riesgo de que las autoridades garantes de protección de datos personales conozcan sobre cuestiones que desborden su competencia.

Lo anterior, se ratifica en las resoluciones del Pleno del INAI que emitió en los recursos de revisión RPD 0300/15, RPD 0301/15, RPD 0302/15, RPD 0318/15 y RPD 0338/15, en los cuales ante una solicitud de corrección de datos personales interpuestas por un grupo de titulares a través de las cuales requirieron al sujeto obligado la corrección de sus datos personales en todos los sistemas de datos personales en su posesión, específicamente el sueldo base de la percepción salarial que recibían en el contexto de créditos hipotecarios. El INAI ordenó modificar la respuesta del sujeto obligado en el sentido de que su Comité de Información emitiera una nueva resolución, en la cual declarara la improcedencia de corregir el sueldo base mensual de los titulares en todos sus sistemas de datos personales.

Al respecto, no se omite que en ese momento estaba vigente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que existieron votos disidentes de diversos Comisionados.

Para mayor abundamiento sobre las consideraciones vertidas, sirva como referencia la resolución número R/01328/2015<sup>3</sup> emitida por la Agencia Española de Protección de Datos en los siguientes términos:

"[...]

**En relación a la falta de veracidad de la deuda reclamada, esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la exactitud de la cuantía de la deuda, la correcta prestación de servicios contratados o la interpretación de cláusulas contractuales, pues su competencia se limita a determinar si se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento de los datos, pero sin realizar indagaciones propias de la esfera civil. La determinación de la legitimidad de una deuda.**  
[...]"

**Énfasis añadido**

En el mismo sentido, la Agencia Española de Protección de Datos señaló en la resolución relativa al expediente número E/04903/2014<sup>4</sup> lo siguiente:

"[...]

Por último, en aras de la tutela de sus derechos en el marco de la LOPD, se le indica que según el artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), **ofrece otra vía reparadora, confirmada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de mayo de 2012. Por la misma, puede usted interponer reclamación ante órgano habilitado para dictar resolución vinculante (entre ellos Junta Arbitral u organismo judicial) y poner tal hecho en conocimiento del actual acreedor/es para que proceda a la exclusión cautelar del fichero de solvencia patrimonial y crédito, al no resultar un deuda cierta, según recoge la Audiencia Nacional, desde el momento en que se presente la reclamación. Para comprobar la exclusión, podrá ejercer posteriormente el derecho de acceso, pudiendo poner en conocimiento de la Agencia la permanencia, a pesar de la reclamación y comunicación de la misma al acreedor.**

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, en su caso, demanda judicial civil, ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (art.50 LE Civil) acompañando toda la documentación precisa para sustentar su pretensión (Auto del Juzgado penal, etc); de manera que una vez admitida a trámite, puede ser puesta en conocimiento de la Entidad responsable del fichero, la cual tiene el deber jurídico de proceder a la baja cautelar de los datos de carácter personal en tanto se sustancia el proceso judicial civil, incurriendo sensu contrario, en una presunta infracción del contenido del art. 44.3 c) LOPD que puede ser puesta en conocimiento de esta Agencia a los efectos legales oportunos.

[...]

**Énfasis añadido**

Según se advierte, la Agencia Española de Protección de Datos desestimó el procedimiento de tutela de derechos considerando que la cuestión planteada excedía su competencia, en atención a la

<sup>3</sup> Disponible en el siguientes vínculo electrónico:

[http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela\\_derechos/tutela\\_derechos\\_2015/common/pdfs/TD-00064-2015\\_Resolucion-de-fecha-10-06-2015\\_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf](http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2015/common/pdfs/TD-00064-2015_Resolucion-de-fecha-10-06-2015_Art-ii-culo-16-LOPD.pdf), consultado por última vez el 4 de octubre de 2017.

<sup>4</sup> Disponible en el siguiente vínculo electrónico:

[http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/archivo\\_actuaciones/archivo\\_actuaciones\\_2015/common/pdfs/E-04903-2014\\_Resolucion-de-fecha-11-05-2015\\_Art-ii-culo-4-3-LOPD.pdf](http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/archivo_actuaciones/archivo_actuaciones_2015/common/pdfs/E-04903-2014_Resolucion-de-fecha-11-05-2015_Art-ii-culo-4-3-LOPD.pdf), consultado por última vez el 4 de octubre de 2017.

sentencia emitida por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso administrativo número 664/2010<sup>5</sup> que indica lo siguiente:

"[...]

Es decir, para la inclusión de los datos en ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, tanto la redacción actual del precepto como la original requiere al inicio del apartado 1.a) que la deuda sea cierta, exigencia que responde al principio de veracidad y exactitud de los datos recogido en el artículo 4.3 de la LOPD al expresar que " *Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado*".

Por ello viene considerando la Sala, también con la redacción actual del citado artículo 38.1.a del RDLOPD tras la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio 2010, que en supuestos como el presente en que consta una reclamación (en este caso administrativa) instada por el afectado para dirimir la certeza de la deuda y su cuantía, no concurre el requisito de deuda cierta exigido por el citado artículo 38.1.a) para la inclusión de los datos en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. En este sentido cabe citar la reciente SAN, Sec.1ª, de 11 de mayo 2012 (Rec. 236/2011) que sigue la línea plasmada de forma reiterada en diversas sentencias anteriores. El citado criterio es el seguido por esta Sala, aunque la SAN, Sec.1ª, de 19 de abril 2012 (Rec. 125/2010) puntualmente se haya apartado del mismo.

Y esto, con independencia del resultado del laudo arbitral que con posterioridad pudiera dictarse, pues la certeza de la deuda constituye un requisito para que los datos personales puedan tener acceso a los citados ficheros ex artículo 38.1.a) RDLOPD, de tal forma que si se incluye una deuda que en ese momento no es cierta se infringe el principio de calidad de datos, por lo que al haberse ya perfeccionado la conducta típica resulta irrelevante a efectos de la existencia de la infracción, el posterior resultado de la reclamación o del laudo arbitral. Lo anterior no es óbice para que lo resuelto, en este caso por la Junta Arbitral, pueda ser valorado y tomado en consideración a efectos de poder apreciar una pueda ser valorado y tomado en consideración a efectos de poder apreciar una cualificada disminución de la antijuridicidad, especialmente a partir de la citada STS de 15 de julio 2010 .  
[...]"

Destacan del extracto de la citada sentencia emitida por la Audiencia Nacional dos elementos, el el hecho de que es necesario que se trate de una deuda cierta a efecto de que válidamente se pueda incluir a una persona en un fichero de información sobre solvencia patrimonial y que la certeza sobre la existencia de la deuda y de la cuantía, en su caso, es materia del laudo arbitral respectivo, en el ámbito administrativo.

En el caso que nos ocupa y en atención a los precedentes del Pleno del INAI que datan de 2015, la rectificación y cancelación de datos personales del Registro Federal de Electores no tienen por objeto ser el vehículo jurídico para dilucidar situaciones propias de las autoridades electorales, al amparo de la Ley General y, por lo tanto, no debería corresponder a las autoridades garantes de la protección de datos personales conocer de este tipo de temas, ni en su ejercicio regulatorio ni en su ejercicio resolutivo.

---

<sup>5</sup> Disponible en el siguiente vínculo electrónico: <http://www.poderjudicial.es/search/index4N.jsp?org=an&comunidad=13#>, consultado por última vez el 4 de octubre de 2017.



Ello es así, partiendo de la premisa de que el hecho generador del vínculo son cuestiones estrictamente político-electorales. Bajo esa óptica, se considera que la procedencia de rectificar o cancelar datos personales del Registro Federal de Electores no debe hacerse, en una primera instancia, al amparo de la Ley General sino más bien privilegiando la normatividad aplicable en materia electoral.

En otras palabras, el ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación de datos personales del Registro Federal de Electores no siempre resultan ser la vía idónea para atender las peticiones de los titulares en un primer momento, por las implicaciones que ello pudiera producir en el contexto electoral.

De este modo, los derechos de rectificación y cancelación de datos personales del Registro Federal de Electores deben ser visualizados como prerrogativas complementarias y dependientes de una determinación sustantiva previa, es decir una determinación electoral, de manera que estos derechos y sus efectos individuales no deben ser vistos de forma aislada sin considerar el contexto en el que se generaron y la situación electoral de la que forman parte.

Por lo anterior, se considera que el proceso de rectificación y cancelación de datos personales del Registro Federal de Electores debe estar sujeto, en un primer momento, a la determinación que en el ámbito administrativo corresponda desarrollar al INE y, en su caso, a los tribunales competentes conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable en materia electoral.

En este sentido, tratándose de la rectificación y cancelación de datos personales del Registro Federal de Electores no existiría posibilidad de que el INAI valorara la procedencia del ejercicio de estos derechos hasta en tanto no exista una resolución definitiva del INE y/o, en su caso, de la autoridad judicial competente.

Dicho de otra forma, resuelta la cuestión relativa a la procedencia de la rectificación y cancelación de datos personales del Registro Federal de Electores por el INE y, en su caso, por los tribunales federales competente, en dado caso, el INAI podría intervenir para calificar si en sus registros, archivos, sistemas, expedientes o plataformas del INE se observa el principio de calidad en torno a los datos personales involucrados y, en consecuencia, si procedería la rectificación o cancelación que fuera solicitada por algún titular afectado.

Por otro lado, en el caso del derecho de acceso a datos personales, hasta el momento, no se advirtieron las implicaciones jurídicas antes descritas en lo que respecta a la rectificación y cancelación del Registro Federal de Electores. Por lo cual, en este caso se considera que el artículo 54 de la Ley General sí resulta aplicable y, por lo tanto, el titular estaría en posibilidades de elegir entre el trámite específico o el procedimiento general para el ejercicio de acceso a datos personales habilitado por INE.

Por lo que se refiere a los derechos de oposición y portabilidad, es necesario realizar una mayor exploración del tema en conjunto con el INE para identificar si se ubicarían en la hipótesis de los derechos de rectificación y cancelación, o bien, en la conclusión a que se llegó, en un primer momento, respecto al derecho de acceso a datos personales, en el marco del Registro Federal de Electores.

## 2. Recomendaciones

A continuación, se identifican aquellas disposiciones del proyecto normativo que de conservar su redacción original podrían contravenir lo dispuesto en la Ley General:

Artículo	Observaciones
2	Sería altamente recomendable limitar el ámbito de validez subjetivo del proyecto normativo que se opina a los órganos y servidores públicos del INE, excluyendo como sujetos regulados a los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos y candidatos independientes, en virtud de que el tratamiento de datos personales que, en su caso, efectúen dichos sujetos debe regirse por la Ley General y los ordenamientos que, en su caso, emita el INAI o el Sistema Nacional de Transparencia.
3, fracción XII	Se sugiere valorar el reconocimiento del sistema INFOMEX-INE como el sistema electrónico autorizado por el INE para tramitar solicitudes de protección de datos personales, debido a que el artículo 52 de la Ley General señala que los medios electrónicos para presentar solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deben ser establecidos por el INAI.
5, 6, 39, 41 y 42	Sería altamente recomendable valorar la pertinencia de los artículos que se opinan, tomando en consideración lo manifestado en el apartado anterior.
44	Sería deseable no limitar la modalidad de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO a formatos físicos, sino considerar otro tipo de medios como el electrónico o de cualquier naturaleza que para tal efecto determine el INAI, conforme al artículo 52 de la Ley General.
44, fracción I	<p>Se sugiere observar lo dispuesto en el "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL FORMATO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS.</p> <p>[...]</p> <p>Documentación que se debe presentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La identidad del titular de los datos personales y, en su caso, de su representante legal deberán ser acreditadas previo al ejercicio del derecho ARCO que corresponda, a través de la presentación en original para su cotejo y copia simple, de un documento de identificación oficial vigente, entre ellos: Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional, Licencia para Conducir y/o Documento Migratorio.</li> <li>Además de lo anterior, en el caso del representante, se deberá presentar el documento en el que consten sus facultades de representación: instrumento público o carta poder simple firmada ante dos testigos, anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervengan en la suscripción del mismo.</li> </ul> <p>[...]"</p>

Artículo	Observaciones
44, fracción V	Sería recomendable replantear el cómputo del plazo que se prevé, debido a que el artículo 52 de la Ley General señala que el responsable tiene un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud para emitir su determinación en cuanto a la procedencia del derecho ejercido.
44, fracción XIV	<p>Sería conveniente eliminar el requisito de que el titular debe señalar la base de datos en la que obran sus datos personales a rectificar, o bien, la finalidad para la que fueron recabados, aunque se señale expresamente "en la medida de lo posible", así como el aportar la documentación que soporte su petición.</p> <p>Lo anterior, atendiendo a que el artículo 52 de la Ley General señala expresamente que no se pueden solicitar mayores requisitos al titular que los previstos en dicha disposición, así como en aras de no generar márgenes de discrecionalidad en la atención de solicitudes por parte de los órganos del INE por la falta de estos elementos adicionales aunque podrían no ser obligatorios.</p>
45, fracción III numeral 5	<p>Sería deseable considerar lo manifestado en el artículo 44, fracción I del proyecto normativo respecto al momento de acreditación del titular. Asimismo, sería conveniente reconsiderar la siguiente redacción "siempre y cuando haya quedado acreditada la identidad y en su caso la personalidad del solicitante", cuando en estricto sentido si el titular actúa a través de su representante debe acreditar su identidad y personalidad, pero no la personalidad del titular tal como se señala.</p> <p>Finalmente, se sugiere señalar expresamente que los datos personales se entregarán sin costo cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples, o bien, exentar el pago de costos de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley General.</p>
45, fracción III numeral 8	Sería recomendable valorar la pertinencia del plazo señalado en el artículo que se opina, debido a que en términos del artículo 53 de la Ley General el responsable cuenta con un plazo máximo de tres días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO para hacer del conocimiento del titular que no es competente.
47	Sería deseable considerar que el INE tiene un plazo máximo de quince días para hacer efectivos los derechos ARCO, en el cual se debe incluir cuestiones de reproducción, pagos y ejercicio efectivo del derecho de que se trate.
48	Sería altamente recomendable valorar la pertinencia de la disposición que se opina, debido a que el INE no tiene competencia para regular cuestiones que impactan directamente a los titulares en el ejercicio de sus derechos ARCO.



Artículo	Observaciones
52	Sería altamente recomendable valorar la pertinencia de solicitar una representación legal, debido a que la Ley General no establece este requisito.
53	Sería deseable no acotar el alcance del derecho de acceso a datos personales previsto en el artículo 44 de la Ley General, es decir, esta prerrogativa implica el acceso a los datos personales que obren en poder del responsable y a conocer información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, debido a que el artículo que nos ocupa acota el derecho de acceso a los datos personales a partir de un formulario que establezca la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
54	Sería altamente recomendable no acotar los medios de entrega de los datos personales a la oficina en donde se presentó la solicitud, sino prever otro tipo de medios que permitan dicha entrega, siempre y cuando se acredite fehacientemente la identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad de su representante. Asimismo, se reitera lo manifestado en el artículo 53 respecto al representante legal.
56	Se sugiere valorar otras modalidades de reproducción de los documentos como podría ser a través de medios digitalizados.
62 y 63	Se sugiere valorar las disposiciones que nos ocupan, debido a que el artículo 52 de la Ley General señala que el INAI cuenta con facultades para establecer los medios y mecanismos para la presentación y atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO.
72, 73 y 74	Sería altamente recomendable valorar la pertinencia de los artículos que se opinan, tomando en consideración lo manifestado en el apartado anterior.
75, 77, 82 y 83	Se sugiere excluir cuestiones relacionadas con el servicio de verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos, ya que la verificación atiende a cuestiones estrictamente electorales y no propiamente de datos personales, en caso de resultar procedente.
88	Se sugiere considerar que cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable adquiere la calidad de responsable de un nuevo tratamiento de datos personales conforme a la normativa de datos personales que le resulte aplicable atendiendo a su naturaleza pública o privada.

A continuación, se señalan una serie de áreas de mejora que podrían fortalecer las disposiciones previstas en el proyecto normativo:

Artículo	Observaciones
1	Se sugiere señalar expresamente la referencia "y demás normatividad que resulte aplicable", en razón de que la Ley General mandata la emisión de normatividad en materias específicas que podrían tener un impacto en el proyecto normativo que se opina, ya sea a cargo del INAI o del Sistema Nacional de Transparencia.
4	Se sugiere precisar que el proyecto normativo que se opina aplica tanto a datos personales en soportes físicos, electrónicos como mixtos.
7	Se sugiere señalar expresamente que las comunicaciones de datos personales que efectúen los órganos del INE deberán seguir las disposiciones previstas en la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable en la materia.
8	Sería altamente recomendable valorar la eliminación de la disposición que se opina, en virtud de que deviene de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuyo alcance ha sido completamente superado de acuerdo con los nuevos estándares nacionales e internacionales en la materia.
10	Se sugiere eliminar la referencia al derecho a la privacidad debido a que el proyecto normativo que nos ocupa tiene por objeto regular exclusivamente el derecho a la protección de datos personales, el cual tutela un bien jurídico distinto al derecho a la privacidad.
11 y 12	Se sugiere señalar expresamente que los procedimientos de conservación, bloqueo y supresión de datos personales deberán observar lo dispuesto en la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable en la materia.
14, fracción IV	Se sugiere incluir la certificación de datos personales, la cual en términos del artículo 50 de la Ley General podría generar costos al titular.
16	Se sugiere señalar expresamente la referencia de la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable en la materia, tal como se establece en el artículo 17.
19	Sería recomendable incluir las modalidades del aviso de privacidad a que se refiere el artículo 27 de la Ley General.
20	Se sugiere valorar el alcance del segundo párrafo del artículo que se opina debido a que no es claro.
22, fracciones II y III y último párrafo	Se sugiere eliminar las referencias a los derechos relacionados con la intimidad personal y la no injerencia arbitraria en la vida privada de los menores, debido a que el proyecto normativo que nos ocupa tiene por objeto regular exclusivamente el derecho a la protección de datos personales, el cual tutela un bien jurídico distinto a los primeros derechos aludidos.



Artículo	Observaciones
25	Se sugiere señalar expresamente la referencia a la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable en la materia, tal como se establece en el artículo 17.
26	Se sugiere señalar expresamente la referencia a la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable en la materia, tal como se establece en el artículo 17.
30	Se sugiere valorar la pertinencia de la referencia al Reglamento de Transparencia, debido a que, en estricto sentido, no podría regular cuestiones relacionadas con la protección de datos personales.
31	Sería altamente recomendable valorar la pertinencia de que el INE cuente con un solo documento de seguridad y no un documento de esta naturaleza por cada órgano que conforma éste.
36	Sería conveniente valorar la pertinencia de lo siguiente "el tiempo que establezca la clasificación al respecto", en razón de que se está confundiendo el deber de confidencialidad que tiene cualquier persona que trata datos personales con cuestiones relacionadas con el derecho de acceso a la información, específicamente clasificación de información confidencial como lo son los datos personales.
37	Se sugiere señalar expresamente la referencia a la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable en la materia, de tal manera que en el ejercicio de los derechos ARCO se observen las disposiciones previstas en dichos ordenamientos.
44, fracción VI	Se sugiere señalar el plazo máximo para reconducir la solicitud del titular a la vía correcta, así como para comunicarle tal situación.
44, fracción VII	Sería recomendable replantear lo dispuesto en la fracción que se opina, debido a que no se señalan los requisitos que debe contener una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO como se menciona.
44, fracción VIII	Sería deseable eliminar el calificativo "notoria" a la incompetencia, a efecto de que dicha disposición guarde congruencia con lo previsto en el artículo 53 de la Ley General.
44, fracción XI	Se sugiere incluir la certificación de datos personales, la cual en términos del artículo 50 de la Ley General podría generar costos al titular, así como señalar que la excepción a no reproducir los datos personales en la modalidad solicitada por el titular es posible siempre y cuando exista una imposibilidad jurídica o física

Artículo	Observaciones
	que limite la reproducción ofreciendo al titular otras modalidades, tal como lo señala el artículo 52 de la Ley General.
44, fracciones XIII, XIV, XV y XVI	Sería deseable valorar la pertinencia de reubicar las fracciones aludidas en aquella disposición que se refiere a los requisitos que deberá contener la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO.
45, fracción III numeral 9	Se sugiere señalar expresamente que los veinte días previstos son hábiles, siendo consistentes con las demás disposiciones del proyecto normativo que nos ocupa.
78, 79, 80 y 81	Sería recomendable valorar la pertinencia de los artículos que se opinan debido a que contienen las mismas disposiciones de los artículos 73, 74, 75 y 75 del proyecto normativo que se opina.
84 y 85	Se sugiere considerar lo dispuesto en los Lineamientos para la recepción, sustanciación y resolución de los recursos de revisión en materia de datos personales, interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobados por el Pleno del INAI, a partir de los cuales el INE podría señalar sus reglas de gestión interna de los recursos de revisión.
86	Se sugiere eliminar la referencia al derecho a la privacidad debido a que el proyecto normativo que nos ocupa tiene por objeto regular exclusivamente el derecho a la protección de datos personales, el cual tutela un bien jurídico distinto al derecho a la privacidad.  Asimismo, señalar expresamente que en materia de transferencias y remisiones de datos personales el INE está obligado a seguir las disposiciones previstas en la Ley General y demás normatividad que resulte aplicable en la materia.
87	Se sugiere señalar expresamente que el INE está obligado a prever en los contratos que suscriba con encargados, al menos, las cláusulas previstas en el artículo 59 de la Ley General y observar lo dispuesto en el artículo 64 de dicho ordenamiento tratándose de servicios de cómputo en la nube y otras materias.

## VI. Conclusiones

La Ley General no siempre resulta ser la vía idónea para satisfacer solicitudes de derechos ARCO, específicamente cuando éstas generan una serie de efectos que impacten sustantivamente en la definición de cuestiones jurídicas vinculadas a aspectos civiles, administrativos, mercantiles, entre otros.

En caso de generar estas consecuencias, en una primera instancia esta petición debe ser conocida y resuelta por la instancia competente que corresponda, ya que de otro modo el INAI correría el riesgo de pronunciarse sobre cuestiones que desbordaran su competencia como órgano garante en materia de protección de datos personales.

Desde una lectura armónica de la legislación electoral y la Ley General, los derechos de rectificación y cancelación de datos personales del Registro Federal de Electores deben ser visualizados como prerrogativas complementarias y dependientes de una determinación sustantiva previa, es decir una determinación electoral, de forma que estos derechos y sus efectos individuales no deben ser vistos de forma aislada sin considerar el contexto en el que se generaron y la situación electoral de la que forman parte.

Por lo anterior, se considera que el proceso de rectificación y cancelación de datos personales del Registro Federal de Electores debe estar sujeto, en un primer momento, a la determinación que en el ámbito administrativo corresponda desarrollar al INE y, en su caso, a los tribunales competentes conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable en materia electoral.

Una vez resuelta la cuestión relativa a la procedencia de la rectificación y cancelación de datos personales del Registro Federal de Electores por el INE y, en su caso, por los tribunales federales competente, en dado caso, el INAI podría intervenir para calificar si en sus registros, archivos, sistemas, expedientes o plataformas del INE se observa el principio de calidad en torno a los datos personales involucrados y, en consecuencia, si procedería la rectificación o cancelación que fuera solicitada por algún titular afectado.

No se omite manifestar que las consideraciones anteriores tienen como propósito brindar una orientación desde el punto de vista estrictamente técnico, y no prejuzgan sobre las determinaciones que en su caso el Pleno del INAI pudiera adoptar al respecto en ejercicio de las facultades que le han sido otorgadas.